

# **MALAS PRÁCTICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO Y LA INEFICACIA DE LAS SANCIONES.**

Rober Agner ALVARADO DE LA CRUZ<sup>1</sup>

## **Introducción**

Los partidos son los actores políticos más importantes en un régimen democrático. No sólo funcionan como instrumentos para postular a los ciudadanos en las elecciones, también sirven, o deben servir, como mediadores entre el gobierno y los ciudadanos, agregan y ordenan intereses de la sociedad, y definen el debate político predominante en un Estado.

Sin embargo, nuestro sistema de partidos, como consecuencia de sus malas prácticas, sufre una crisis de pérdida de identidad que ha conllevado a una volatilidad electoral en México.

Siete son los Partidos Políticos nacionales que actualmente cuentan con registro oficial: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática; Partido Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista Mexicano, Partido del Trabajo, y Partido Movimiento Regeneración Nacional. Todos ellos, han sido denunciados por sus homólogos por comisión de ilícitos electorales; la autoridad electoral ha observado conductas sancionables por el sistema legal electoral y los ha multado; se han visto envueltos en conflictos por corrupción política.

La academia y los medios de opinión le han enseñado a la sociedad que esos institutos políticos gastan mucho dinero; detentan mucho poder; imponen candidaturas; establecen alianzas vergonzantes; postulan a personas que luego defraudan la confianza del electorado y a las arcas del gobierno; se pelean entre sí; y, lo más grave, que toman decisiones priorizando sus intereses sobre los problemas de la propia ciudadanía.

Las malas prácticas de los Partidos Políticos, generan: la pérdida de las condiciones igualitarias de competencia; la distorsión de la agenda política a partir de la cual se gestan las opciones electorales; que las campañas tiendan a vaciarse de contenidos programáticos, tratándose a quien ostenta la candidatura como un objeto de publicidad y no como portador de opciones para la sociedad; y, aumenta el carácter clientelar de una elección.

---

<sup>1</sup> Titular del Órgano Técnico de Fiscalización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Maestro en Derecho Electoral por la Escuela Judicial del TEPJF. E-mail: [rober.alvarado@iepct.mx](mailto:rober.alvarado@iepct.mx)

Pero, ¿Cuáles son éstas malas prácticas a las que con frecuencia recurren los Partidos Políticos?

En el presente trabajo, abordaré las más trascendentes, como: la imposición de candidaturas, la no distribución del financiamiento público (en cualquiera de sus rubros) a los comités municipales, el financiamiento ilegal en las campañas electorales, hasta permitir que los fondos financieros provenientes de la delincuencia organizada penetren en las campañas, lo que ha enturbiado al ámbito político de las entidades federativas y desatado violencia en contra de algunos candidatos y, por último, la compra de votos.

La ciudadanía ha entrado en una fase de desencanto hacia los Partidos Políticos, los que han perdido identidad y esa es la razón de su descrédito. “Los partidos políticos entran en crisis por no ejercer – o por hacerlo deficientemente- sus funciones, especialmente las de conformar y encauzar la voluntad popular, de consolidar la representación política, de fungir de gozne entre la opinión pública y el gobierno; y de aportar ideas, proyectos y programas para el gobierno”. (Fernández 2003,43)

La razón de esta ponencia es aportar un conjunto de datos y reflexiones que estimulen el debate, del porqué a pesar de las sanciones no se han podido inhibir esas malas prácticas, a fin de identificar las acciones prioritarias para disminuir los riesgos de una sociedad gobernada por el dinero y no por las mayorías.

## **1.- Justicia partidaria**

Dos de las malas prácticas las encontramos estrechamente vinculadas a la justicia partidaria, cuando hablamos de la no distribución del financiamiento público a los comités municipales y la imposición de candidaturas.

Por eso vale la pena, explorar a grandes pinceladas el marco legal que regula la vida interna de los Partidos Políticos, a fin de entender con mayor claridad, porque los actos denunciados por militantes no son sancionados en igualdad de circunstancias o mejor aún, atendidos en tiempo y forma, y por qué en las candidaturas son postuladas las personas con menores méritos y pocas posibilidades de triunfo, lo cual parecería una paradoja.

Tenemos muy claro, que los partidos políticos son entidades de interés público, que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación

política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular.

Pero, ¿Cómo se regula la vida interna de los Partidos Políticos? ¿Existen reglas claras en sus procedimientos? ¿Quién se queja y quien resuelve? ¿se respetan los plazos establecidos?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), no establece expresamente que los partidos políticos tienen la obligación de prever mecanismos o procedimientos para la imposición de sanciones a los militantes, ni los medios para impugnar tales decisiones o aquellas determinaciones tomadas por los órganos del partido político, en especial, las relativas a los procesos de selección interna de candidatos, así como de los dirigentes partidistas, ni las características que deban tener (los mecanismos), en cuanto a las instancias, plazos, entre otros detalles; tanto para la promoción como para el trámite, sustanciación y resolución.

La Constitución se limita a definirlos y dotarlos de autonomía. Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 34, establece que los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, y en la Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. Siendo asuntos internos de los partidos políticos: la elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; la determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos; la elección de los integrantes de sus órganos internos; los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos que agrupen a sus militantes, así como, la emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos.

Es importante tener en cuenta que las reformas recientes en materia electoral establecieron la impugnabilidad de actos o resoluciones de los partidos políticos. En efecto, el artículo 99, párrafo cuarto, fracción V de la CPEUM, fue objeto de reforma en el sentido de establecer que para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas.

En tanto, el artículo 80, párrafo 1, inciso g) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) fue reformado para establecer expresamente, como supuesto de impugnación en la procedencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en contra de actos o resoluciones del partido político al que está afiliado cuando estime que violan alguno de sus derechos político-electorales, el cual también es aplicable a los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular aun cuando no estén afiliados al partido señalado como responsable.

Conforme a lo anterior, resulta indispensable el conocimiento de las instancias internas establecidas en cada uno de los partidos políticos, ante la necesidad de agotarlas, como un presupuesto de procedencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

Incluso, se impone la necesidad de que los tribunales electorales locales tengan presentes las instancias y mecanismos internos de los partidos políticos, pues no debe perderse de vista que algunas legislaciones estatales prevén un medio de impugnación para combatir los actos partidistas.

A continuación, veremos la reglamentación que forma parte de la normativa de los partidos políticos, aparte de sus documentos básicos:

PARTIDO	NORMATIVA
PAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en Posesión del Partido Acción Nacional</li> <li>• Reglamento de las Relaciones entre el Partido Acción Nacional y los Funcionarios Públicos de Elección Postulados por el PAN</li> <li>• Reglamento de Acción Juvenil</li> <li>• Reglamento de Militantes del Partido Acción Nacional</li> <li>• Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional</li> <li>• Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular</li> <li>• Reglamento de Órganos Estatales y Municipales</li> <li>• Reglamento para la Administración del Financiamiento</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglamento del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional</li> <li>• Reglamento de la Comisión Permanente del Consejo Nacional</li> <li>• Reglamento sobre la Comisión Anticorrupción y Actividades Relacionadas</li> </ul>
<b>PRI:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidaturas</li> <li>• Reglamento de la Comisión Nacional de Procesos Internos</li> <li>• Acuerdo General de Financiamiento</li> <li>• Código de Justicia Partidaria</li> <li>• Reglamento del Consejo Político Nacional</li> <li>• Reglamento Interior de la Comisión Política Permanente</li> <li>• Reglamento de las Organizaciones Adherentes</li> <li>• Reglamento para la Afiliación y Registro Partidario</li> <li>• Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública</li> <li>• Reglamento del Sistema Nacional de Cuotas</li> <li>• Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional</li> <li>• Reglamento de la Defensoría de los Derechos de los Militantes y Medios Alternativos de Solución de Controversias</li> <li>• Código de Ética Partidaria</li> </ul>
<b>PRD:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglamento del Congreso Nacional</li> <li>• Reglamento de las Coordinadoras Autoridades Locales</li> <li>• Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Gestión Documental del Partido de la Revolución Democrática</li> <li>• Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la Revolución Democrática</li> <li>• Reglamento de Afiliación</li> <li>• Reglamento de los Consejos</li> <li>• Reglamento de Direcciones</li> <li>• Reglamento de Elecciones</li> <li>• Reglamento de las Direcciones de Comunicación Nacional y Estatales</li> <li>• Reglamento del Instituto de Formación Política</li> <li>• Reglamento de la Organización Nacional de Mujeres del Partido de la Revolución Democrática</li> <li>• Reglamento de Órgano de Justicia Intrapartidaria</li> <li>• Reglamento del Patrimonio y Recursos Financieros</li> <li>• Reglamento de Organización Nacional de las Juventudes de Izquierda del Partido de la Revolución Democrática</li> </ul>
<b>PT:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normas Reglamentarias que Regulan la Paridad de Género para la Elección de los Integrantes de los Órganos de Dirección Nacional del Partido del Trabajo</li> </ul>
<b>PVEM:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglamento de Financiamiento de la Secretaría de Finanzas</li> <li>• Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Archivos y Protección de Datos</li> </ul>
<b>MC:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglamento de los Círculos Ciudadanos</li> <li>• Reglamento de Convenciones y Procesos Internos</li> <li>• Reglamento del Consejo Nacional y de los Consejos Ciudadanos Estatales</li> <li>• Reglamento de Justicia Intrapartidaria</li> <li>• Reglamento de Jóvenes en Movimiento</li> <li>• Reglamento de los Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil</li> <li>• Reglamento para las Organizaciones Sectoriales</li> <li>• Reglamento para la Participación Ciudadana y Reconocimiento al Mérito</li> <li>• Reglamento General de Transparencia, Datos Personales, Archivos y Acceso a la Información</li> <li>• Reglamento de Transparencia, Datos Personales, Archivos y Acceso a la Información para Dirigencias Estatales</li> <li>• Reglamento de Administración, Finanzas y Control Interno</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglamento de la Coordinación Nacional de Autoridades Municipales de Movimiento Ciudadano</li> <li>• Reglamento de las y los Legisladores de Movimiento Ciudadano</li> <li>• Reglamento de Mujeres en Movimiento</li> <li>• Reglamento de los Órganos de Dirección</li> <li>• Reglamento de Trabajadores y Productores en Movimiento</li> </ul>
<b>MORENA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglamento de Afiliación</li> <li>• Reglamento de Educación, Formación y Capacitación Política</li> <li>• Reglamento de Finanzas</li> <li>• Reglamento para el Manejo del Padrón Nacional de Afiliados</li> <li>• Reglamento del Instituto Nacional de Formación Política de Morena</li> <li>• Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena</li> </ul>

Fuente: INE

Después de analizar la normativa que tienen los Partidos Políticos, observamos que a pesar de que son instrumentos de la democracia, sus normas internas son poco transparentes y carentes de procesos normativos que estimulen la participación y dirección de los mismos, mediante métodos democráticos.

No obstante, que ante el limitado orden normativo que tienen los partidos, se suma la negligencia e intereses personales de sus dirigencias, pues ellos se autodeterminan en lo relativo a la conformación de sus militancias, el funcionamiento y estructura de sus órganos de gobierno, sus métodos de participación, la manera de nominar a sus candidatos, y la administración del financiamiento.

Ello les permite a las dirigencias partidarias tomar decisiones con un gran margen de discrecionalidad. Desde determinar los tiempos y métodos para elegir y renovar dirigencias; modalidades para la selección de candidaturas; las decisiones para establecer alianzas; disposiciones para el uso de recursos financieros, etc.

Esto ha creado confusión y desconfianza en la sociedad. A la juventud, en la actualidad, no les parece atractivo formar parte de las filas partidistas; a los ciudadanos con aspiraciones a participar en el gobierno, no le queda claro cuáles son las llaves de acceso y ascenso dentro de las filas partidarias; las candidaturas son resueltas muchas veces de forma autoritaria y sin reconocer el mérito y la militancia. Muchos dirigentes optan por personas famosas o populares para representarlos en una candidatura, (personas que puedan inyectarle dinero propio a la campaña) dejando de lado la militancia, los méritos de las personas afiliadas, o bien colocan a familiares y amigos en esas postulaciones, y este caso lo hemos visto cuando por cuestiones de cumplir con las cuotas de género, acciones afirmativas implementadas, o bien ahora por principio constitucional, se recurre a poner a las esposas o

hermanas de los varones en el poder, confiando que concentrando los recursos económicos en estas candidaturas “de su interés” podrán ganar. En las entidades federativas siempre veremos que los integrantes de los Comités Directivos estatales estarán en las boletas ostentando una candidatura de mayoría relativa o bien de representación proporcional, poco les importa el procedimiento normativo para la selección de sus candidatos, en los hechos, hacen lo que les place.

En ocasiones, las alianzas entre Partidos Políticos de diferente ideología, se fundamentan en los intereses de sus respectivas dirigencias para postular candidatos, que de otra forma no podrían impulsar debido a las resistencias internas de sus militancias o a los impedimentos reglamentarios de sus propias normas partidarias internas.

Estas alianzas oportunistas -y a veces hasta antagónicas- son basadas en la ambición política y la búsqueda mezquina de oportunidades impúdicas. Han existido épocas en que dos o más partidos acuerdan una alianza para buscar una gubernatura y al mismo tiempo, son adversarios en otra entidad o en las elecciones federales.

Partidos de izquierda y de derecha, establecen candidaturas comunes, sin pactar un programa de acción mínimo en caso de obtener el triunfo. Alianzas que tienen éxito electoral, se traducen en fracasos de gobierno, debido a los diferendos posteriores por el repartimiento de cuotas de poder o la imposibilidad de tomar decisiones administrativas que dejen contentos a los militantes de opciones tan divergentes.

La mala imagen de muchos dirigentes de ese tipo de estructuras se confunde con la propia figura del Partido del cual son adherentes. Además, el importante financiamiento público que reciben las estructuras partidarias, ha producido que exista una élite dirigente en cada institución, que ha visto su actividad política como la fuente única de sus ingresos y subsistencia.

Existe una burocratización de las estructuras partidarias dirigentes. No sólo se ha creado una estructura profesional –en lo que se refiere a las necesidades orgánicas de un Partido-, sino una cúpula sectaria que vive de la institución, que no permite la regeneración de cuadros y el surgimiento de nuevas ideas y prácticas internas.

Se ha observado que, las dirigencias estatales que administran los recursos del financiamiento público, para poder conservar la cúpula, no distribuyen los recursos de acuerdo a su propia normativa interna, a las dirigencias municipales de su partido, les dicen

que los recursos no alcanzan y los dejan en el abandono, razón por la cual muchos comités municipales durante el tiempo que no hay proceso electoral cierran sus puertas y trabajan desde casa o desde la calle por amor al arte, y es hasta que se inicia el proceso -y a veces antes- que las dirigencias pactan con algún simpatizante o militante que a cambio de alguna candidatura se encargue de “instalar” al Partido en su pueblo o municipio, es decir, que facilite una casa o local, lo pinte, rotule y amueble para que sirva de referente durante la contienda electoral.

Muchos de los procedimientos internos están plagados de irregularidades, donde los plazos no son respetados, ni se otorgan las garantías constitucionales mínimas, los asuntos son encajonados o congelados, a fin de dejar en estado de indefensión a los quejosos, para que cuando acudan a los tribunales, los hechos sean materialmente irreparables, actuando con total arbitrariedad.

Los Partidos Políticos, como detentadores del poder, están expuestos a abusar de él; a servirse del poder mismo. Como cualquier forma de gobierno autoritario, la Partidocracia necesita ser acotada, vigilada y sometida al marco de la legalidad.

## **2. Financiamiento ilegal en campañas**

Las distintas reformas electorales han ido poniendo énfasis a la regulación del monto y las fuentes de financiamiento que pueden recibir y gastar los partidos políticos en sus actividades ordinarias y de cara a las campañas electorales.

En México la ley es muy clara al privilegiar de manera preponderante el financiamiento público sobre el privado. Esta preponderancia de financiamiento público busca, además de equilibrar las condiciones de la competencia, reducir la vulnerabilidad de los partidos ante presiones externas y financiamiento ilegal, así como fortalecer la estructura y el sistema de partidos compensando la escasez de ingresos de la militancia.

La reforma de 2014 incorpora cambios sustanciales no solo en la manera en que se fiscaliza sino incluso en las consecuencias de las conclusiones.

Así se establecieron como causas de nulidad de las elecciones las siguientes:

- a. el rebase de topes de gasto de campaña;
- b. por el uso de recursos de origen prohibido; o,



c. por la adquisición de tiempo en radio y televisión, al margen de la prerrogativa que se otorga por ley a los partidos y candidatos.

En el nuevo modelo de fiscalización nacional, la aprobación de los dictámenes y resoluciones de fiscalización, así como la calificación y declaración de validez de la elección, son procesos vinculados que ahora se sincronizan.

En primer lugar, el INE concluye la fiscalización y determina, en su caso, los rebases de topes de gasto en campaña. Enseguida, el TEPJF analiza la información y cuando considera que el rebase es determinante en el resultado de la elección la anula y solicita que se convoque a una nueva.

Sin embargo, a pesar de las prevenciones que el legislador hizo para evitar el financiamiento ilegal en las campañas electorales, los Partidos Políticos evaden las prohibiciones de la Ley, y tratan de burlar la fiscalización de la autoridad electoral administrativa, usando métodos que dejen cero o pocos rastros en sus operaciones, me refiero a dos viejas prácticas: por un lado, el financiamiento ilegal a candidaturas con recursos públicos y, por otro lado, el financiamiento ilegal con recursos privados.

En el primer caso, los recursos del presupuesto público son transformados primero en efectivo, ya que esta es la principal forma en la cual los operadores de las campañas los utilizan a fin de no dejar rastros contables.

Los dictámenes de fiscalización del INE, han dado cuenta de las diversas modalidades, usadas por los Partidos Políticos en el poder, entre ellas encontramos: ingresos en efectivo no reportados, facturas apócrifas, sobrecostos en adquisiciones de bienes y obra pública, subcontratación forzosa, descuentos o aumentos de nómina, programas sociales y otros cuantos.

**2.1. Ingresos en efectivo.** Existen muchos ejemplos de cómo a través de la contribución no registrada (municipal o estatal), se pueden tomar esos recursos públicos para financiar campañas electorales. Uno de ellos es, la expedición de actas del registro civil, sea nacimiento, matrimonio, divorcio o defunción, documentos que se cobran en ventanilla de la tesorería pero que el dinero no ingresa al registro contable de la administración, justificándose los folios usados ante la RENAPO, como condonaciones de la autoridad facultada o bien registrados como realización de colectivos en beneficio de la población de bajos recursos económicos. Es muy común también, usar para esos fines los recursos

provenientes de normatividad y fiscalización del municipio, esto es, el dinero que cobran a los ambulantes, los clandestinos (vendedores de cervezas en sus domicilios si tener licenciada para ello), negocios de giros negros, permisos de anuncios luminosos (de acuerdo a cada normativa local), ya que se trata de dinero que se recibe de mano a mano, por así convenir a los intereses de los involucrados. Un ejemplo más, es la venta de boletos para espectáculos en estadios, ferias y palenques, propiedad estatal. A lo anterior, se suman los ingresos derivados de algunas líneas de negocio que, por condiciones excepcionales, poseen estos gobiernos, por ejemplo, casas de empeño, gasolineras o farmacias.

Otra fuente importante de ingresos en efectivo no reportados son las empresas paraestatales de transporte público, o concesiones similares que cobran una fracción importante de sus servicios directamente a los usuarios en efectivo. Una práctica común en los gobiernos es reducir artificialmente los ingresos reportados de estas compañías, sacando el efectivo de los registros y, posteriormente, fondear las empresas con subsidios directos del presupuesto. (Casar y Ugalde 2019, 94)

**2..2. Descuentos o aumentos de nómina.** No es un secreto que los recursos públicos destinados al pago de nómina son inmensos y que ello hace al rubro propenso históricamente a ser desviado hacia campañas políticas. En las administraciones públicas se ha desarrollado la mala práctica de hacer retenciones en el depósito del pago de nómina de los trabajadores a fin al partido en el poder, con el fin de hacer llegar esos recursos al instituto político o directamente a alguna campaña electoral, en tanto el trabajador firma su recibo como si hubiera recibido la totalidad de su sueldo. Otro *modus operandi*, es aumentar los sueldos del personal a fin a la presidencia o al gobierno, pactando previa y verbalmente que esa diferencia la tiene que retirar y entregar a un responsable, quien lo registra en un control interno pero externo a la administración gubernamental, para posteriormente pasarlo a la campaña electoral o al partido correspondiente. El argumento con el que justifican dichos descuentos o aumentos, es el trabajo político a favor del partido y para poder continuar en la administración pública que corresponda, fortaleciendo así la candidatura en turno. Se ha observado que los montos de descuento o aumento varían en proporción a la categoría, y a la confianza entre los operadores y los empleados.

Otra forma en la cual se utiliza el capítulo 1000 de servicios personales para el pago de campañas políticas es mediante la retención de impuestos y cuotas de Seguridad Social a

los trabajadores públicos que no son enterados al Servicio de Administración Tributaria (SAT) o a los institutos de seguridad social estatales o federales. Es decir, el trabajador ve afectado su sueldo en ese rubro, pero el gobierno estatal no realiza el pago final. El diferencial es entonces enviado a campañas políticas o desviado a actos de corrupción. (Casar y Ugalde 2019, 100)

**2.3. Sobrecostos en adquisiciones de bienes y obra pública.** Otra forma de desviar recursos públicos hacia campañas políticas, es mediante la contratación de bienes u obra pública con sobreprecios, con el objetivo de que los pagos adicionales sean regresados en efectivo a los funcionarios u operadores de las campañas.

**2.4. Subcontratación forzosa.** Se realiza mediante la contratación de bienes o servicios en procesos de licitación o adjudicación directa, los cuales pudieran parecer transparentes y competitivos ante las autoridades fiscalizadoras. Sin embargo, en ellos, la entidad federativa obliga al proveedor a subcontratar los servicios de otro proveedor dentro del mismo presupuesto. Por ejemplo, un estado podría contratar mediante un proceso licitatorio la construcción de un paso a desnivel, pero forzar de manera ilegal a que la empresa ganadora subcontrate a otra empresa (fantasma o bien establecida) para que, al menos en papel, realice el 30 por ciento de la obra; lo anterior, bajo el entendido que la empresa subcontratada en realidad no realiza ningún servicio ni aporta ningún valor agregado o, cuando lo hace, el pago pactado es muy superior a dicho valor agregado. Tiempo después, la empresa subcontratada utiliza los recursos que haya cobrado para las campañas electorales. (Casar y Ugalde 2019, 98)

**2.5. Facturas apócrifas.** Se refiere a la contratación de servicios con empresas inexistentes también conocidas como empresas “fantasma”, y la consecuente emisión de facturas apócrifas o falsas. Lo anterior se ha logrado identificar, mediante la verificación de a qué empresas se realizan los pagos, fiscalizando su inscripción en el padrón de proveedores y sus domicilios. Mediante el uso de facturas falsas algunas entidades han sido capaces de burlar el sistema presupuestal y sacar dinero de las tesorerías al realizar estos pagos a cuentas de operadores políticos o prestanombres. Parte de esos recursos podría estar siendo utilizada con fines electorales.

**2.6. Programas sociales.** El uso discrecional, condicionado y direccionado de programas sociales es una de las herramientas de mayor facilidad en su uso para campañas políticas. Lo

anterior, debido a la imposibilidad de limitar su entrega durante campañas políticas. Si bien la legislación cada vez ha sido más estricta en tratar de prohibir el uso electoral de programas sociales —mediante la creación de periodos de “veda electoral” en los cuales no pueden promocionarse acciones de gobierno— en casi todos los casos de los que se tiene registro, el poder judicial ha decretado inválido solicitar a los gobiernos que detengan la entrega de apoyos o programas sociales, por considerarla prioritaria para los individuos y las familias. Es común observar que las entidades federativas incrementen el gasto en programas sociales durante años electorales.

Es importante diferenciar dos fenómenos. El primero tiene que ver con la entrega condicionada de apoyos. La entrega per se de ayudas, mediante programas sociales no necesariamente se podría tipificar como un financiamiento ilegal de campañas. Sin embargo, cuando su entrega está condicionada al voto, o cuando los apoyos se envuelven con logotipos o imágenes de los candidatos, o se realiza en actos multitudinarios en los cuales la presencia de los candidatos es visiblemente enfocada en un acto electoral, sí lo es. El segundo fenómeno es el uso de los recursos de los programas sociales como una especie de nómina de las estructuras partidistas, cuadros o bases de adeptos al partido. En ocasiones, los gobiernos incluyen en los padrones de beneficiarios a operadores electorales, de tal manera que sus sueldos se pagan con cargo a programas de becas, apoyos o despensas, producto de los programas sociales. Por último, en ocasiones se usan padrones inflados de programas sociales para cobrar apoyos de personas que no son enteradas de estar registradas, y ese dinero es concentrado y usado para fines electorales.

En cuanto al financiamiento ilegal de las campañas electorales con recursos privados, hemos de señalar que, éste comprende aportaciones en dinero o en especie por parte de individuos o empresas que rebasan el límite legal, o bien que se hacen mediante lavado de dinero y/o evasión fiscal. El mecanismo más común es la simulación de operaciones, utilizando empresas fantasmas o empresas fachadas que no entregan el bien o servicio que ofrecen, pero que cobran por él para luego entregar una factura y regresar el dinero “lavado” al partido que lo contrató. Otros mecanismos son el uso de facturas apócrifas; la entrega de donativos a fundaciones con exención fiscal, las cuales devuelven una parte —o todo— al donante; la contratación de servicios por parte de una empresa en beneficio de un partido político, por ejemplo, publicidad; o el préstamo de activos de la empresa sin cobrar por el

servicio, por ejemplo, oficinas, helicópteros o aviones. Sin dejar de lado, las aportaciones que se hacen cuando las candidaturas punteras en las encuestas le solicitan a constructoras establecidas o bien constructores en lo particular, comprometiendo la realización de la obra pública a futuro.

En algunas zonas del país, en las que el narcotráfico tiene mayor presencia; se han dado indicios de que el crimen organizado patrocina algunas campañas electorales, para crear compromisos previos y materializarlos en actos indebidos al inicio del gobierno. Operan de forma similar al descrito en el financiamiento privado, aunque este agrega elementos como violencia, intimidación y terror. En Michoacán, por ejemplo, en la elección de Gobernador 2021, se denunció la presencia de grupos delincuenciales cometiendo actos de violencia.

El principal mecanismo es el lavado de dinero, mediante el cual los criminales entregan dinero ilícito a empresas fantasma o fachada que lo lavan y devuelven a los primeros, o bien, que lo entregan al candidato o partido que el grupo delictivo quiera apoyar. Generalmente se da en el ámbito municipal y su objetivo es controlar el territorio para que los criminales puedan seguir desarrollando sus actividades ilícitas. Otro mecanismo es la propagación del miedo, es decir, la advertencia de los daños que se pueden desencadenar si no se vota en tal o cual sentido. O también se amenazan o violentan candidatas o candidatos que se opongan a sus intereses. Ejemplo de ello es golpear, mutilar o asesinar a operadores políticos o candidaturas del partido contrario. Se dice que este mecanismo es menos costoso, por lo que los criminales tienden a usarlo con mayor frecuencia. (Casar y Ugalde 2019, 142-143)

En América Latina el único caso de narco financiación que se ha acreditado dentro de un proceso judicial, es el caso colombiano de Ernesto Samper, en su campaña a la Presidencia de la República de Colombia. Esto gracias a la grabación de los famosos narcocasetes que dejaron al descubierto que los traficantes de droga lograron introducir aportes importantes de millones de pesos con el fin de llevar un candidato a la Presidencia. Fue así como en abril de 1995 nació el proceso 8,000. Durante más de dos años de investigación la Fiscalía General de Colombia y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pusieron tras las rejas a importantes personalidades de la vida política, entre ellos senadores, representantes a la Cámara, un procurador general, un ex contralor, y a varios de los más importantes testaferros del cartel de Cali. El propio presidente Samper fue juzgado y absuelto

por el Congreso de la República, aunque el proceso fue muy polémico ante la ciudadanía colombiana y ante la opinión internacional.

Los diversos actores políticos, respaldados por sus institutos políticos, con sus malas prácticas de entrega de dádivas, sobornos y compra de votos, han encarecido la política en México y otros países, por lo que mientras las elecciones sigan siendo costosas, habrá un mercado para el narco financiamiento, hay una oferta-demanda, que implica garantías de cumplimiento, la demanda se cumple con campañas costosas, y la oferta viene por el secuestro o dominio de territorio. Por eso se ha hecho famoso el dicho: “político pobre... pobre político”.

### **3. Compra y coacción de votos**

Llegamos a la industria del dinero en la política en México: la compra y coacción del voto. Aunque éste negocio ha ido decayendo, es una mala práctica tan antigua, como vigente que merece su propio análisis, porque a pesar de las medidas preventivas por parte del legislativo, de los propios partidos y operadores políticos, así como de la aplicación de sanciones legalmente establecidas, esta mala conducta sigue persistiendo.

La práctica de la compra y coacción del voto se han documentado desde antes de la Independencia y sobreviven hasta la época contemporánea. Sin embargo, se desconoce la dimensión de estos fenómenos. Es difícil aprehenderlos en sí mismos, porque se trata de un acto ilegal, sucede en lo oscuro, son tratos clandestinos.

Algunos estudios de investigación muestran que la compra y coacción del voto se convierten en inversiones de alto riesgo, porque no es posible verificar su eficacia, ante la secrecía del voto.

Es importante recordar que artículo 7º de la Ley General en Materia de Delitos Electorales en su fracción VII establece categóricamente la tipificación de la compra de votos. De manera textual, el referido numeral señala que: se le impondrá de cincuenta a cien días de multa y prisión de seis meses a tres años, a quien: VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma. Aumentando la conducta especificada si es cometida por un

integrante de un organismo de seguridad pública, se incrementará hasta un tercio de la pena prevista en el presente artículo. De igual forma, se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición. (LGMDE 2014).

A pesar de ello, en México persiste una cultura de clientelismo electoral que se maximiza en las campañas electorales. La gente de sectores más vulnerados, los líderes de la clase obrera y campesina, esperan los tiempos electorales como una fuente de ingresos. Los líderes son buscados por representantes de candidaturas o partidos políticos a fin de contratarlos para que representen la causa política o candidatura haciendo proselitismo dentro de sus vecinos o comunidad, y en algunos casos el trabajo inicia desde la precandidatura, a cambio de un pago en efectivo o en especie, además de ser ellos quienes administren los recursos financieros el día de la jornada electoral con el que habrán de operar comprando votos o líderes adversarios, que pueda coaccionar votantes que garanticen el triunfo.

De acuerdo a diversas técnicas de investigación, como grupos focales, entrevistas y encuestas, sean obtenido algunos resultados que nos permiten concluir, que la compra y coacción del voto se ha convertido en una industria, porque todos ganan, el candidato hace una colecta económica para no poner todo de su bolsa, y busca allegados que puedan aportarle a su campaña, por simple simpatía, o en la mayoría de los casos se compromete la obra pública a constructores, se compromete la dirección de administración, o se hace cualquier compromiso a cambio de favor de la administración pública que se busca encabezar. Otros aportan vales de gasolinas, prestan vehículos, envían papelería, regalan descuentos en consultas médicas o en análisis clínicos, en fin, a la campaña llegan muchos apoyos, tanto creados como voluntarios. Cuando el candidato tiene lista la bolsa, se dispone de ella, “se echa a andar la maquinaria”, se nombra la estructura de campaña: la coordinación general, coordinaciones regionales, representación electoral, y toda la estructura del activismo político: coordinadores de zona, de sección electoral, de manzana, los multiplicadores, los activistas, los movilizadores y cualquier denominación que se les quiera dar a quienes realizan el trabajo de activismo político en favor de una candidatura. Todo ellos empiezan a ganar un sueldo quincenal. A ellos ya los están esperando en las comunidades,

barrios, colonias y manzanas, sobre todo los líderes de cada zona, con una lista de peticiones, algunas personales o familiares (recetas de medicamentos, sillas de rueda, molinos, muletas, despensas, solicitud de efectivo) y otras de índole comunitario (chapeo de un campo deportivo, arreglo de camino vecinal, arena para una entrada de viviendas, un transformador de energía eléctrica, etc.) y aquí se empieza el camino del trueque candidatura –votante, entrega de dadivas a cambio del voto en favor de la candidatura o del partido. Cuando los integrantes de la estructura de activismo ven demasiada disposición del partido o candidaturas para entregar apoyos o dinero, empiezan a meter a familiares y amigos, dándoles prioridad para obtener mayores ganancias del proceso. Durante mi corta experiencia he observado que la gente dice “prefiero pedirle ahora que esta de candidato (a) porque cuando se siente en la silla no los volvemos a ver”; “que nos den un poco de lo que ellos han robado”; “todo esto que nos dan es del dinero del pueblo que les dan a los partidos”.

Durante el recorrido del activismo político, los encargados “recogen” inquietudes y peticiones, hacen su propio análisis del entorno y formulan propuestas hacia el centro de la coordinación de la campaña, pero siempre coinciden en algo: tantas personas están dispuestos a vender su voto y le ponen precio, con la justificación de porque habría que cómprales el voto; el líder tal está molesto por un incumplimiento del candidato en tiempos pasados, pero dice que si le dan tanto, el jala a favor de nosotros y el mueve tantas familias, que son las que necesitamos para ganar; los coordinadores de campaña en su mayoría ceden a estas peticiones y fluye el dinero en efectivo.

Lo políticos en campaña que compran votos, se han quejado que la gente se ha convertido en sinvergüenzas, que los engañan, les venden el voto y al momento de sufragar los traicionan, ya que les sacaron el dinero o ciertos beneficios los abandonan, que poco a poco se ha venido perdiendo la buena costumbre de empeñar la palabra. Algo que parece de risa, pero que pasa en el andar electoral. Por eso han tratado de implementar que les sea entregada una foto del voto emitido, para validar el compromiso hecho, en otras ocasiones se sabe, que los hacen acompañarse de un menor para vigilar que voten en favor del partido quien pagó por el voto.

Una de las formas más usadas por los partidos en el poder, es la amenaza de que la no votar por el partido en cuestión, se le dará de baja de los programas federales de los que ya forman parte. De igual forma a todos los trabajadores de confianza de la administración



pública estatal o municipal, los coaccionan a votar por el partido bajo la amenaza de despidos inmediatos.

Lauro Mercado Gasca ha recopilado una información valiosa acerca de la ineficacia de la inversión en compra y coacción del voto. En 2014, de los encuestados que dijeron haber recibido regalos a cambio de su voto, sólo el 20% votó por el mismo partido que les dio el regalo. Además, habría que descontar cuántos de ellos previamente ya habían decidido votar por dicho partido, aún antes de recibir la prebenda.

Al cruzar diversas encuestas e interpretaciones de las mismas, Mercado concluye que, en la elección de 2000, uno de cada 100 votos fue producto de la compra o coacción del voto. Sin embargo, admite que se trata solo de una aproximación. En cambio, sin que pueda ser calificada por las leyes mexicanas compra o coacción del voto, Mercado calcula que el voto clientelar en México, equivale entre el año 2000 y el 2014, al 14% de los votos totales.

El Informe Mensual de Actividades de FEPADE-PGR, informa que, en el periodo enero-junio 2018, en el marco de las campañas para cargos de representación popular, se iniciaron 435 expedientes<sup>35</sup>. El principal delito investigado fue alterar el Registro Federal de Electores (59.3%), comprar votos y/o amenazar con suspender beneficios de programas sociales (12%) y hacer mal uso de archivos o datos del Registro Federal de Electores (6.7%)

#### **4. Rebase de topes de gastos de campaña**

Justamente para inhibir el flujo de dinero en demasía en las campañas electorales, se establecieron topes de gastos de campañas. La regulación de la fiscalización electoral incorpora generalmente reglas relativas al control y la restricción del gasto que pueden realizar los contendientes de los procesos electorales.

Al respecto, el artículo 41, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la ley fijará los límites a las erogaciones en las campañas electorales. De manera similar, el artículo 116, fracción IV, inciso h) del texto constitucional establece que las constituciones y leyes de los estados también deben prever esos límites. Sobre esta cuestión, la SCJN ha sostenido que el legislador ordinario debe fijar las sanciones aplicables a quienes rebasen el tope de gastos de campaña para garantizar los principios de legalidad y equidad (Tesis P./J. 103/2011 9a.).

Uno de los principios indispensables de los sistemas electorales es la equidad entre los contendientes, por lo que no debe haber ventajas indebidas entre los competidores y ha

de asegurar que se den las condiciones necesarias para que los partidos de oposición puedan participar con posibilidades reales de ganar las elecciones. (Magaloni y Prudencio (2014: 22)

La finalidad primordial del establecimiento de los topes de gastos de campaña es proteger la equidad. La ausencia de estos límites comporta el riesgo de que aumente el dispendio y el poder de quienes se encargan de proporcionar financiamiento político y, por tanto, de que la competencia democrática se distorsione. En síntesis, la finalidad primordial de establecer un tope de gastos de campaña y sancionar con la nulidad de la elección el quebrantamiento de tal límite es proteger el principio de equidad para que la voluntad de la ciudadanía se exprese libremente y sin distorsiones derivadas del exceso de flujo de dinero, así como para garantizar que todos los partidos tengan la posibilidad de ganar las elecciones. (Casar y Ugalde 2018: 28, 54)

Recordemos que una de las novedades de la reforma constitucional en materia electoral de 2014<sup>2</sup> fue la creación de nuevas causales de nulidad de las elecciones. Entre ellas, se consideró que el rebase del tope de gastos de campaña puede acarrear esa consecuencia. El artículo 41, base VI, de la Constitución determinó que las leyes establecerían un sistema de nulidades de las elecciones federales y locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, entre otros supuestos, cuando el gasto de campaña exceda en un 5% el monto total autorizado. La misma disposición también previó que, para que se actualizara esa causal de nulidad, era necesario que las violaciones se acreditaran de manera objetiva y material y que la determinancia se presumiría cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primer y segundo lugar de la elección fuera menor al 5%. En las iniciativas de las que derivó tal reforma constitucional puede advertirse la intención de facultar a la autoridad jurisdiccional electoral para declarar la nulidad de las elecciones por ese motivo. De igual forma, la reforma estableció la obligación del Congreso de la Unión de introducir en la ley un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuentan los partidos políticos, coaliciones y candidatos, sistema que debía prever, entre otras cuestiones, las facultades y procedimientos para que la fiscalización se realice de forma expedita y oportuna durante la campaña electoral.

No obstante, quienes han analizado la génesis y desarrollo de esta causal —incluso antes de su regulación constitucional— han mostrado que su aplicación efectiva tropieza con claras dificultades. Por ejemplo, antes de la reforma, uno de los grandes problemas era que

el proceso de fiscalización de los gastos de campaña finalizaba mucho tiempo después de que los ganadores de las elecciones hubieran tomado protesta del cargo, lo cual imposibilitaba que esta irregularidad pudiera ser analizada oportunamente por los tribunales.

Otro problema ha sido la interpretación de la determinancia respecto de esta causal y su vinculación a la decisión de los electores. Como se mostrará, quienes han analizado el tema explican que esto es inadecuado, puesto que, en caso de que fuera posible conocer si el exceso de gasto tuvo efecto sobre la voluntad de los electores, los tribunales no podrían utilizar las herramientas científicas necesarias para conocer esa situación. El problema de definir cuándo una irregularidad es determinante o no aún se mantiene en el modelo que diseñó la Constitución. Si bien la irregularidad puede presumirse cuando la diferencia entre el primer y segundo lugar de la elección sea inferior al 5% de la votación y exista un rebase del límite de gastos que supere un porcentaje similar, también puede ser desvirtuada.

Al respecto, el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es que las juezas y los jueces pueden desvirtuar la presunción de determinancia a partir de la valoración del contexto del asunto, con lo cual se permite cierto margen de discrecionalidad para que los órganos jurisdiccionales valoren esta situación y, por tanto, cierta indeterminación sobre la actualización de la causal.

## **5. Las sanciones y su ineficacia**

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización entre otros, contienen un conjunto de disposiciones y sanciones que han venido estableciéndose a fin de inhibir las malas conductas de los Partidos Políticos y sus operadores.

Específicamente en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, existe ya todo un catálogo de infracciones, delitos, que difícilmente diríamos que existen conducta sin tipificar, en su mayoría ya están contempladas, por lo que la reflexión debe ser, porque esas sanciones no han sido suficiente para lograr inhibir las malas prácticas, ¿Por qué no han sido eficaces?, ¿Es necesario aumentarlas o cambiarlas?

La compra de votos, la orientación de la votación en la casilla hacia un partido el día de la jornada electoral, el condicionamiento de los programas sociales con fines electorales,

el ordenar la evidencia del sentido del voto, se sanciona con cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años.

Y con cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años al funcionario partidista o candidatura que utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados. Y la misma sanción aplica cuando se ejerza presión a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición.

En lo que corresponde a los servidores públicos, la ley establece que a quien coaccione a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por una candidatura, o condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales o sociales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de una precandidatura o candidatura o viceversa, se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años.

Por su parte la LEGIPE, en su artículo 456 contempla las siguientes sanciones: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de tope los gastos de campaña, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso y en caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble, sin dejar de lado, la posibilidad de nulidad de la elección.

Para la pérdida de registro como Partido Político, sólo se prevén dos causales: el incumplimiento de las obligaciones en materia de origen y destino de los recursos, por un lado, en segundo lugar, el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Con una condicionante en ambos casos, siempre y cuando sean casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de la Ley.

En cuanto a las personas aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos de elección popular, la ley contempla la amonestación pública; multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente, y pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidatura o cancelación de la misma.

Como podemos observar, en su mayoría son sanciones pecuniarias, con cargo a la ministración del financiamiento público, particularmente en el rubro del destinado a

actividades ordinarias, para la cual sólo se puede afectar hasta el 50 por ciento de su ministración mensual.

La ineficacia de las sanciones, que en mi opinión se percibe, se debe en buena parte en la ejecución del cobro de las sanciones pecuniarias, por una parte. A un Partido Político se le multa con ciertos millones de pesos, y en primer lugar, tenemos que apuntar, que será con cargo al presupuesto del financiamiento público, específicamente al rubro de actividades ordinarias, como ya apuntamos, pero que además se elaborará un calendario de pagos, para lo cual hay que tener en cuenta cuánto es la ministración mensual de dicho partido en el rubro de actividades ordinarias, con ese dato, se procede a calcular el 50% y la cantidad resultante, será la que se descuenta mensualmente, pero para iniciar a ejecutarlo, antes hay que revisar si ya cuenta con multas anteriores, se actualiza el calendario de cobros y es muy probable que esta multa calculada, no se inicie a descontar en seguida, sino se tenga que agendar el primer pago hasta meses o años posteriores. En Tabasco, por ejemplo, el PVEM tiene un calendario de multas vigentes programado hasta diciembre 2026. Y aunado a ello, encontramos que en algunas entidades federativas los OPLES no hacen descuentos del 50% de afectación a las ministraciones mensuales comentadas, sino sólo un 25% de las mismas, dado que dejan un porcentaje del 25 % libre de lo que marca la ley, previendo como consejos estatales, algún disposición judicial o laboral, o bien para saldar las multas derivadas de los Procedimientos Sancionadores locales.

La nulidad de la elección por rebase de topes de gastos de campaña, ha sido muy cuestionada, en cuanto a la valoración que se hace al calificar la determinancia, ¿cómo saber que tanto afecto ese rebase de topes de gastos en la votación total emitida? ¿bajo qué método se debe valorar la determinancia?. La sanción no es garantía de nada, al no estar del todo resuelto el criterio de la determinancia por incurrir en exceso de gastos.

La pérdida de registro está prevista ante el incumplimiento de las obligaciones en materia de origen y destino de los recursos de los Partidos, siempre y cuando sean casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de la Ley, pero a la fecha no hemos visto que esto se aplique.

## **Conclusiones**

De acuerdo con lo expuesto en los apartados precedentes es posible concluir:

La democracia interna en los partidos políticos no existe. Se requiere de un examen sereno y franco de los problemas que se han generado. Creo que la solución no está en reformar o unificar su marco normativo, la reflexión debe ir enfocada sobre si la justicia intrapartidaria es letra muerta que solo obstaculiza los procesos, y en ese caso si debe permanecer o desaparecer, un posible escenario, sería que los Tribunales electorales locales directamente administren justicia a los militantes y simpatizantes, porque se requiere de una instancia que sancione las arbitrariedades cometidas al interior de los Partidos y restituya los derechos políticos electorales a tiempo, que no se dé por enterado cuando sean actos materialmente irreparables. Aquí iniciaría la discusión.

Ante la compra de votos, encontramos que el voto secreto, es un buen mecanismo para obstaculizar su práctica. Y por supuesto que se puede fortalecer la secrecía del mismo con acuerdos políticos con los partidos, para que los votantes no entren a la casilla de votación acompañados sin tener un requerimiento especial, y para que, tampoco entren con cualquier medio electrónico, ya que una de las prácticas más comunes entre quienes compran y coaccionan el voto es solicitar una foto de la boleta marcada como prueba.

Es importante que los órganos electorales en sus campañas de promoción al voto den a conocer a los votantes sus derechos electorales y se impulse la concepción del voto como un bien público que representa un compromiso colectivo y por lo tanto un derecho social.

Hay que difundir entre la ciudadanía que la compra y coacción del voto es un delito. Podría considerarse a las redes de compradores y coaccionadores del voto como, delincuencia organizada. Hay quienes recomiendan hacer investigaciones judiciales en las zonas en donde hay mayor incidencia de la compra y la coacción del voto, para acopiar información y estar en posibilidad de dismantelar las redes criminales.

Los recursos de actividades ilícitas tratan de ocultarse y mantenerse al margen de las autoridades hacendarias y bancarias de nuestro país, por lo que resulta indispensable que el flujo de información sea continuo para que las autoridades electorales la utilicen dentro de sus revisiones con la finalidad de que las candidaturas financiadas con recursos ilícitos no puedan obtener el registro como candidatos, o bien, llegado el caso, que las elecciones sean anuladas. Tal es la importancia de impedir que estos recursos financien campañas electorales que la reforma de 2014 constitucionalizó en el artículo 41, tres causales de nulidad de elecciones federales o locales directamente relacionadas con los recursos de los partidos en

las campañas por violaciones graves, dolosas y determinantes: el rebase del 5 por ciento de los topes de gastos de campaña; la compra o adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión y, el uso o recepción de recursos públicos o de procedencia ilícita en campañas.

Contribuir al ejercicio de la actividad electoral con plena observancia de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas sobre el origen y destino de los recursos, es responsabilidad de todos: autoridades, partidos políticos, candidatos, candidatas y ciudadanía en general. Se debe trabajar coordinadamente por contiendas electorales equitativas, a fin de consolidar la democracia en nuestro país.

## **Bibliografía**

### **a) Textos**

Casares, María Amparo y Ugalde Ramírez, Luis Carlos. 2019. *Dinero bajo la mesa: Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México*. México: Grijalbo.

García, María Isabel. 1998. “Samper admite por primera vez que el narcotráfico pagó su campaña electoral”. *El País*, 21 de julio, sección Internacional. Disponible en: [https://elpais.com/diario/1998/07/22/internacional/901058401\\_850215.html](https://elpais.com/diario/1998/07/22/internacional/901058401_850215.html)  
(Consultado el 14 de julio de 2022)

Fernández Ruiz, Jorge. 2003. *El Poder Legislativo*. México: Porrúa.

Hernández Hernández, José Octavio. 2016. “Nulidad de elección por rebase de topes de gastos de campaña”. *Tribunal Electoral del Estado de Jalisco*. (octubre): 139-149. Disponible en: <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/sufragio/article/viewFile/34195/31166>  
(Consultado el 31 de julio de 2022)

Lauro Mercado Gasca. 2014. Clientelismo electoral. Limitantes del voto libre y secreto en México. En *Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano. Perspectiva estatal e internacional*, 237-277. México: TEPJF. Disponible en : <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5099/9.pdf> (Consultado el 30 de julio de 2022)

Pérez Fernández, Germán, coord. 2018. Compra y coacción del voto en el proceso electoral 2018: el caso de la Ciudad de México. México: INE. Disponible en: <https://centralectoral.ine.mx/wp-content/uploads/2018/11/FACULTAD-DE-CIENCIAS-POL%C3%8DTICAS-UNAM.pdf> (Consultado el 30 de julio de 2022)

#### **b) Normatividad**

CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2007. México, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM\\_ref\\_178\\_13nov07\\_ima.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_178_13nov07_ima.pdf)

LGMDE. Ley General en Materia de Delitos Electorales. 2014. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Disponible en: [https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDE\\_200521.pdf](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDE_200521.pdf)

LGIPE. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 2014. Disponible en: [http://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5345952&fecha=23/05/2014](http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345952&fecha=23/05/2014) (Consultada el 15 de julio de 2022).

LGPP. Ley General de Partidos Políticos. 2014. México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Disponible en: [http://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5345955&fecha=23/05/2014](http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345955&fecha=23/05/2014) (Consultada el 14 de julio de 2022).

LGSMEME. Ley Electoral del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSMIME.pdf> (Consultada el 14 de julio de 2022).

#### **c) Sitios web**

INE. Instituto Nacional Electoral. Documentos básicos y reglamentos de Partidos Políticos. Disponible en: <https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/documentos-basicos/> (Consultada el 8 de agosto de 2022)

FEPADE. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. S/A, Informe Mensual de Actividades, abril, FEPADE-PGR, 2018. Disponible en:



<http://www.fepade.gob.mx/work/models/fepade/informes/2018/Abril2018.pdf>

(Consultado el 15 de julio de 2022)

RFINE. Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 2016. México:

Instituto Nacional Electoral. Disponible en:

[https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DSVarios/docs/2016/Reglamentos\\_fiscalizacion/Reglamento\\_Fiscalizacion.pdf](https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DSVarios/docs/2016/Reglamentos_fiscalizacion/Reglamento_Fiscalizacion.pdf) (Consultado el 25 de julio de 2020).